



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-003-2022-00089-01
Demandante:	Bernardo Antonio Galvis Muñeton
Demandado:	Colpensiones E.I.C.E.
Asunto:	Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de vejez - Liquidación mesada pensional

Medellín, mayo tres (03) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO con ausencia justificada y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Bernardo Antonio Galvis Muñeton y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., respecto de la sentencia proferida el 13 de marzo de 2023 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por Bernardo Antonio Galvis Muñeton en contra de Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-003-2022-00089-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton convocó a juicio a Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez desde el 01 de enero de 2015, con base en el promedio salarial realmente devengado, y al pago de los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional reconocido mediante la Resolución SUB 220695 de 2020.

En respaldo de tales pedimentos, el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton expuso que cumplió los 60 años de edad el 09 de abril de 2009, que realizó cotizaciones al Sistema General de Pensiones hasta el 31 de diciembre de 2014, y que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 23 de septiembre de 2020, prestación que fue reconocida mediante la Resolución 220695 del 19 de octubre de 2020, a partir del 23 de septiembre de 2017, con una mesada inicial de \$1.865.670, la cual asevera es deficitaria respecto de la realmente causada, siendo que los salarios no fueron debidamente indexados al momento de liquidar el IBL más favorable.

Afirmó que estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, pero se trasladó a la AFP Protección S.A. de forma irregular, que el 17 de marzo de 2012 solicitó el traslado de régimen pensional y el reconocimiento de la pensión de vejez, pero para retornar al Régimen de Prima Media tuvo que acudir ante la jurisdicción, y que la sentencia que puso fin a dicha controversia se profirió el 01 de octubre de 2019, estando interrumpida la prescripción hasta aquel entonces.

Finalmente, informó que el 13 de abril de 2021 solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo y el reajuste pensional deprecados, petición que fue desestimada a través de la Resolución SUB 107918 del 10 de mayo de 2021 (doc.03, carp.01).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, Colpensiones E.I.C.E. admitió que el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton, cumplió los 60 años de edad el 09 de marzo de 2009, que realizó aportes al Sistema General de Pensiones hasta el 31 de diciembre de 2021, que promovió un proceso judicial para retornar al Régimen de Prima Media, que fue pensionado por vejez mediante la Resolución 220695 del 19 de octubre de 2020, a partir del 23 de septiembre de 2017, con una mesada inicial de \$1.865.670, y que el 13 de abril de 2021 solicitó el retroactivo causado desde el 01 de enero de 2015 y el reajuste de la mesada con una tasa de reemplazo del 90%.

Sostuvo que no obra respaldo de la solicitud para el reconocimiento de la pensión de vejez presuntamente radicada el 17 de marzo de 2012, que en sus archivos reposa una petición presentada el 17 de marzo de 2015, pero la misma solo está referida a la declaración de invalidez de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual, que la única solicitud relacionada con el reconocimiento de la pensión de vejez data del 23 de septiembre de 2020, que la AFP Protección S.A. es la entidad llamada a reconocer y/o indemnizar el pago de las mesadas pensionales deprecadas por ser la única responsable de su pérdida, y que la liquidación de la mesada pensional otorgada se encuentra ajustada a derecho.

En oposición el éxito de las pretensiones, excepcionó la falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar retroactivo de la pensión de vejez; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar reliquidación de la pensión de vejez; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios; inexistencia de la pretensión de indexación; buena fe; prescripción; compensación e imposibilidad de condena en costas (doc.10, carp.01).

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 13 de marzo de 2023 declaró que el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton no

tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional deprecado; condenó a Colpensiones E.I.C.E. a pagar en favor del demandante la suma de \$1.397.073 por concepto de reajuste pensional causado entre el 23 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2023, y la suma de \$2.540.876, a partir del 01 de diciembre de 2022, por concepto de mesada pensional reajustada; absolvió a la entidad demandada de las demás pretensiones incoadas; y condenó en costas a Colpensiones E.I.C.E., en favor del demandante (doc.20, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

El poderhabiente judicial del señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton impetró el recurso de alzada en orden a que se revoque la sentencia de primera instancia, en cuanto absolvió del reconocimiento del retroactivo pensional y los intereses moratorios, arguyendo que a su prohijado le asiste el derecho al reconocimiento del retroactivo pensional por haber acreditado los requisitos de causación y disfrute de la pensión de vejez desde el 01 de enero de 2015, y que ello nada tiene que ver con que se esté emitiendo ningún tipo de sanción en contra de Colpensiones E.I.C.E., y que la prescripción de las mesadas se interrumpió desde el año 2015, cuando solicitó la declaratoria de la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, la aplicación del régimen de transición, y el reconocimiento de la pensión de vejez, y hasta el año 2018, cuando se emitió la sentencia que puso fin a la controversia, razón por la cual la prestación debió desde la fecha en que cesó el pago de aportes, siendo que durante dicho interregno Colpensiones E.I.C.E. siempre tuvo el conocimiento de que el demandante estaba reivindicando su afiliación al Régimen de Prima Media y que, por ende, estaba tácitamente en trámite el reconocimiento de la pensión

Finalmente, solicitó se revise la liquidación efectuada por el a quo teniendo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas y la correcta indexación de los salarios devengados, a efectos de que se modifique la condena impuesta respecto del mayor valor causado en favor de su prohijado (minuto 01:06:50, doc.20, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, el apoderado de judicial de Bernardo Antonio Galvis Muñeton expuso que el juez de la causa no había tenido en cuenta la interrupción de la prescripción con la reclamación de anulación del traslado de régimen pensional, y que el reconocimiento del retroactivo deprecado no corresponde a una sanción sino a la materialización de un derecho legalmente consolidado (doc.03, carp.02).

Por su parte, la apoderada de Colpensiones E.I.C.E. reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda (doc.04, carp.02).

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., en los puntos que no fueron objeto de alzada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton nació el 09 de abril de 1949 (pág.30, doc.01, carp.01), se trasladó a la AFP Protección S.A. el 01 de enero de 2004 (págs.31-34, doc.01, carp.01), y le solicitó a Colpensiones E.I.C.E. declarar la invalidez de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual en la fecha 17 de marzo de 2015 (pág.44, doc.03, carp.01).

- Que el actor demandó ante la jurisdicción ordinaria la ineficacia del traslado del régimen pensional, proceso que fue conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-001-2017-00578-00, y en el que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 28 de enero de 2019, acogió las pretensiones incoadas, en el sentido de ordenar a Colpensiones E.I.C.E. tenerlo válidamente afiliado al Régimen de Prima media, sin solución de continuidad, decisión que fue confirmada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en la fecha 01 de octubre de 2019 (pág.34, doc.03, carp.01).

- Que el demandante arribó a los 60 años de edad el 09 de abril de 2009(pág.30, doc.01, carp.01), realizó aportes al Sistema General de Pensiones hasta el 31 de diciembre de 2014 (págs.35-43, doc.01, carp.01), y solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 23 de septiembre de 2020 (págs.39, doc.11, carp.01), prestación que fue reconocida mediante la Resolución SUB 220695 del 19 de octubre de 2020 ,bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición, a partir del 23 de septiembre de 2017, con una mesada inicial de \$1.865.670, liquidada sobre 1.187 semanas cotizadas, un IBL de \$2.221.036 y una tasa de reemplazo del 84% (págs.09-17, doc.03, carp.01).

- Que el pretensor solicitó el reconocimiento las mesadas causadas desde el 01 de enero de 2015, y el reajuste de la mesada pensional en cuanto al IBL y aplicando una tasa de reemplazo del 90% en la fecha 13 de abril de 2021 (pág.07, doc.03, carp.01), petición que fue desestimada a través de la Resolución 107918 del 10 de

mayo de 2021, argumentando que la prestación había sido correctamente liquidada, y que las mesadas causadas con anterioridad al 23 de septiembre de 2017 estaban prescritas, siendo que la prestación solo se reclamó el mismo día y mes del año 2020 (págs.18-29, doc.03, carp.01).

- Y que el litigioso por activa solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación el 08 de octubre de 2021 (pág.08, doc.03, carp.01)

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

- ¿Si la reclamación incoada en procura de que se declarara la ineficacia, invalidez y/o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual tuvo la vocación de interrumpir el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas pensionales deprecadas?

- ¿Si la sentencia proferida en el proceso de la referencia se encuentra ajustada a derecho?, debiéndose establecer para el efecto ¿Si la mesada pensional fue liquidada con base en todas y cada una de las semanas cotizadas, y con la correcta indexación de los salarios reportados?

- ¿Si es procedente el reconocimiento y pago de los intereses de mora deprecados?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual (i) la única reclamación que tiene la vocación de interrumpir el fenómeno de la prescripción es la que contenga de forma clara, concreta y determinada el derecho reclamado; (ii) para la determinación del monto de la mesada pensional es necesario indexar los salarios no solo hasta la fecha de causación, sino hasta la

fecha en que se produce el disfrute efectivo; (iii) sobre el mayor valor causado por concepto de reajuste pensional proceden los descuentos para el Sistema General de Salud; y (iv) los intereses de mora proceden, incluso, frente el retardo injustificado en el reconocimiento pago total y parcial de las mesadas causadas en favor de los afiliados; razones por las cuales la sentencia de primera instancia será MODIFICADA, ADICIONADA, REVOCADA y CONFIRMADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES

El artículo 2512 del Código Civil establece:

“ARTICULO 2512. DEFINICION DE PRESCRIPCION. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”.

Adicionalmente, el artículo 2535 ibídem preceptúa:

“ARTICULO 2535. PRESCRIPCION EXTINTIVA. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”.

En otras palabras, la prescripción se presenta por la inactividad del beneficiario, durante el lapso consagrado en la ley, del ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del derecho; y se justifica por motivos de orden práctico, en tanto se pretende que las relaciones jurídicas no se mantengan inciertas y que las situaciones de hecho que se prolonguen en el tiempo se solucionen, por esta razón se le limita el derecho de acción para que sea ejercido en un término razonable en la búsqueda de la seguridad jurídica, y es por ello que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de vieja data:

“... la prescripción, como modo de extinguir las obligaciones, es una excepción legítima al postulado de la irrenunciabilidad de derechos, en cuanto propende por la realización de

otros valores como la aludida seguridad jurídica y el ejercicio responsable de los derechos” (CSJ SL16798-2015, reitera en SL3178-2022).

Consecuentemente, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:

“ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.

En idéntico sentido, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social prevé:

“ARTICULO 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

Ahora bien, cumple memorar que el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo establece:

“ARTICULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.

Y que el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social indica:

“ARTICULO 6. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton nació el 09 de abril de 1949 (pág.30, doc.01, carp.01), que cumplió la edad mínima para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez el mismo día y mes del año 2009 (pág.30, doc.01, carp.01), que acreditó la densidad mínima de semanas para el mismo efecto el 05 de abril de 2011 (págs.35-43, doc.01, carp.01), y que realizó aportes al Sistema General de Pensiones hasta el 31 de diciembre de 2014 (págs.35-43, doc.01, carp.01), se colige que, en efecto, le asistía el derecho a disfrutar de la pensión de vejez desde el 01 de enero de 2015, siendo que, aunque no existe reporte formal de la novedad de retiro, su intención de finiquitar la vinculación al Sistema General de Pensiones se infiere inequívocamente de la concurrencia del cumplimiento de los requisitos mínimos y cese en las cotizaciones, tal y como lo admitió Colpensiones E.I.C.E. en la Resolución 107918 del 10 de mayo de 2021 (págs.18-29, doc.03, carp.01).

Pese a lo anterior, se advierte que en el plenario no obra medio demostrativo que acredite que el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton le hubiera solicitado a Colpensiones E.I.C.E. el reconocimiento de la pensión de vejez en la fecha el 17 de marzo de 2012, como se indicó en el libelo genitor (hecho segundo - págs.01-04, doc.03, carp.01), o en la fecha 17 de marzo de 2015, como se manifestó en la sustentación del recurso de apelación (minuto 01:06:50, doc.20, carp.01).

Conviene memorar que sobre el particular la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado *“Por consiguiente, así como el demandado debe alegar la excepción de prescripción para favorecerse de sus efectos, y, por tanto, probar los supuestos de hecho que la sustentan, en el caso de la interrupción, es el demandante quien debe probar tal aspecto, para que el juez pueda declarar en su favor los derechos que han surgido, y que no se vieron afectados por tal fenómeno”* (CSJ SL170-2021, que trae a colación la SL del 18/09/2012, radicado 40404)

De otro lado, cumple relieves que en la reclamación radicada ante el Colpensiones E.I.C.E. el 17 de marzo de 2015 expresamente se petitionó *“... le solicito que se declare que la afiliación hecha a Protección es inválida y, en consecuencia, se*

retrotraigan los efectos jurídicos ocasionados, es decir, que pueda conservar el régimen de transición”, esto es, no se solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, y contrario a lo deprecado por el recurrente, con la referida reclamación no puede entenderse tácitamente reclamado el derecho a la prestación pensional, bajo la égida de que Colpensiones E.I.C.E. siempre tuvo el conocimiento de que el demandante estaba reivindicando su afiliación al Régimen de Prima Media, por cuanto, para que se interrumpa el término de prescripción, el reclamo del derecho debía estar debidamente determinado, es decir, el reconocimiento de la pensión tendría que haberse expresamente solicitado para que se surtieran los efectos pretendidos, en adición a ello el proceso judicial tendiente a la declaratoria de ineficacia no interrumpe el término de prescripción, siendo que el derecho pensional podía solicitarse como pretensión acumulativa.

Al respecto, conviene rememorar que el órgano jurisdiccional ha reiterado que, ese «simple reclamo por escrito» puede entenderse como cualquier requerimiento o solicitud que hubiese realizado, incluso, en peticiones realizadas ante autoridades judiciales o administrativas “... *siempre que en su contenido se advierta de forma clara, concreta y determinada el derecho reclamado*”, esto es, “... *que lo pretendido en ese «simple reclamo» debe estar individualizado, es decir, que lo solicitado debe ser claro y determinable*” (CSJ SL12900-2014, reiterada en SL4554-2020).

Consecuentemente, la Sala colige que la única reclamación que tuvo la vocación de interrumpir la prescripción, fue la radicada el 23 de septiembre de 2020 (págs.39, doc.11, carp.01), y por ello, las mesadas pensionales causadas con anterioridad al último trienio, esto es, al mismo día y mes del año 2017, sufrieron los efectos extintivos del referido fenómeno, tal y como se sostuvo en la Resolución 107918 del 10 de mayo de 2021 (págs.18-29, doc.03, carp.01), y lo argumentó el juez de la primera instancia, razón por la cual habrá de confirmarse en este aspecto la sentencia venida en apelación.

2.5.2.- LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo pertinente prevé:

“ARTICULO. 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

(...)

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos”.

En lo que respecta al ingreso base de liquidación, el artículo 21 ibídem, establece:

“ARTICULO. 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”

Y en lo referido al monto o tasa de reemplazo, el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año, en lo que interesa, reza:

“ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así:

(...)

a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y,

b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario”

Así las cosas, conviene memorar que el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton fue pensionado por el riesgo de la vejez, a través de la Resolución SUB 220695 del 19 de octubre de 2020, en aplicación del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición, a partir del 23 de septiembre de 2017, con una mesada inicial de \$1.865.670, liquidada sobre 1.187 semanas cotizadas, un IBL de \$2.221.036, liquidado sobre el promedio de los 10 últimos años y una tasa de reemplazo del 84% (págs.09-17, doc.03, carp.01).

En lo que respecta al ingreso base de liquidación, cumple relieves que, en el caso concreto, el mismo solo puede liquidarse con base en el promedio de los salarios devengados por el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, en la medida en que, contaba con 44 años de edad para el 01 de abril 1994, allende que nació el 09 de abril de 1949 (pág.30, doc.01, carp.01), esto es, le faltaban más de 15 años para cumplir la edad mínima para pensionarse, y porque solo acredita 1.187 semanas cotizadas (págs.35-43, doc.01, carp.01), es decir, no cuenta con las 1.250 semanas exigidas para acceder al ingreso base de liquidación de toda la vida.

Realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, la Sala encontró que el promedio de los salarios devengados por el señor Bernardo Antonio Galvis

Muñeton durante los últimos 10 años, actualizados con el IPC del año 2014, teniendo en cuenta que la prestación empezaría a disfrutarse desde el 01 de enero de 2015, asciende a la suma de \$1.966.865 (ver liquidación anexa), que con una tasa de reemplazo del 84%, arroja a una mesada a reconocer de \$1.652.167, que actualizada anualmente con base en IPC, asciende a la suma de \$1.933.725 para el año 2017, suma que resulta superior a la liquidada por Colpensiones E.I.C.E. porque, aunque reconoció la prestación a partir del año 2017, indexó los salarios con el IPC del año 2014 (págs.226-237, doc.11, carp.01), y que también es superior a la fijada por el cognoscente de primer grado, porque al momento de indexar los salarios tomó como factor de actualización el IPC del año 2019 (doc.19, carp.01).

En glosa de lo anterior, lo procedente será modificar en este aspecto la decisión opugnada, en el sentido de condenar a Colpensiones E.I.C.E. a pagar en favor del demandante la suma de \$5.484.722, por concepto de reajuste pensional liquidado entre el 23 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2023, y a seguirle reconociendo la suma de \$2.617.090, a partir del 01 de abril de 2023, por concepto de mesada pensional, conforme a la liquidación aneja a la presente decisión.

Finalmente, se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se adicionará la sentencia consultado, autorizando a Colpensiones E.I.C.E. descontar del reajuste pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

2.5.3.- LOS INTERESES MORATORIOS

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“ARTICULO. 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad

correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”

Y por delineamiento jurisprudencial, los referidos intereses:

“... (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales” (CSJ SL3130-2020, SL1019-2021)

Adicionalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo:

“Para la Corte, en este punto, no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues, teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación.

Así las cosas, una interpretación teleológica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios también proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensión, pues en este caso el pensionado también sufre un injusto perjuicio, que merece reparación objetiva.

En ese sentido, para la Corte es preciso subrayar que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993” (CSJ SL1681-2020, SL1019-2021).

Respecto a la fecha desde la que se hacen exigibles, la jurisprudencia ha enfatizado de forma iterativa, que:

“... los citados intereses comienzan a causarse desde la fecha en la que empieza el retardo del pago del beneficio pensional, por lo que se debe precisar que solo es dable

hablar de retardo cuando se ha incumplido con el término establecido en la Ley para el reconocimiento de la prestación” (CSJ SL 33233 del 15/05/2008, SL 42488 del 17/04/2012, SL1023-2021).

Y en cuanto al tiempo con el que cuenta la administradora de pensiones para resolver la solicitud de reconocimiento pensional radicada por la demandante, se relleva que el inciso final del párrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1933, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece:

“ARTICULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ

(...)

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”.

Consecuentemente, lo procedente será revocar la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a Colpensiones E.I.C.E. respecto de los intereses de mora deprecados, y en su lugar, la misma será condenada a reconocerlos, liquidarlos y pagarlos, exclusivamente sobre el valor adeudado por concepto de reajuste pensional, desde el día siguiente al vencimiento de los cuatro meses que tenía para resolver la solicitud pensional, esto es, desde el 24 de enero de 2021, considerando que la petición de reconocimiento pensional fue radicada desde el 23 de septiembre de 2020 (págs.39, doc.11, carp.01), y hasta la fecha en la que se haga efectivo el pago completo de la obligación.

Y aunque es cierto que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad a negar el reconocimiento de la prestación, y en esa dirección no resultaba razonable imponer el pago de intereses moratorios cuando la conducta de la administradora estuvo guiada por el respeto a la normativa que de manera expresa regía el derecho en controversia, también es cierto que la negativa en el reconocimiento del reajuste deprecados no se derivó de la aplicación de la norma, sino de

indebida actualización de los salarios al momento de fijar el valor de la mesada pensional.

Por todo lo anterior, deberá modificarse, revocarse, adicionarse y confirmarse la sentencia de primera instancia. Sin cosas en esta instancia por haber alcanzado prosperidad el recurso de apelación propuesto por el señor Bernardo Antonio Galvis Muñeton, aunque fuere de manera parcial, y por haberse revisado la sentencia de primer grado bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICAN** los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el 13 de marzo de 2023 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Bernardo Antonio Galvis Muñeton contra Colpensiones E.I.C.E., en el sentido de indicar que el reajuste pensional causado entre el 23 de septiembre de 2020 y el 31 de marzo de 2023 asciende a la suma de \$5.484.722, y que la mesada a reconocer a partir del 01 de abril de 2023, asciende a la suma de \$2.617.090, sin perjuicio de los incrementos y descuentos de ley.

2.- Se **ADICIONA** un numeral a la sentencia de fecha y origen conocidos, para autorizar a Colpensiones E.I.C.E. descontar del reajuste pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

3.- Se **REVOCA** el numeral cuarto de la sentencia de fecha y origen conocidos y en su lugar, se condena a Colpensiones E.I.C.E. a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, únicamente sobre el valor adeudado por concepto de reajuste pensional, desde el 24 de enero de 2021, y hasta la fecha en la que se haga efectivo el pago de la obligación.


4.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

5.- Sin costas en esta instancia.

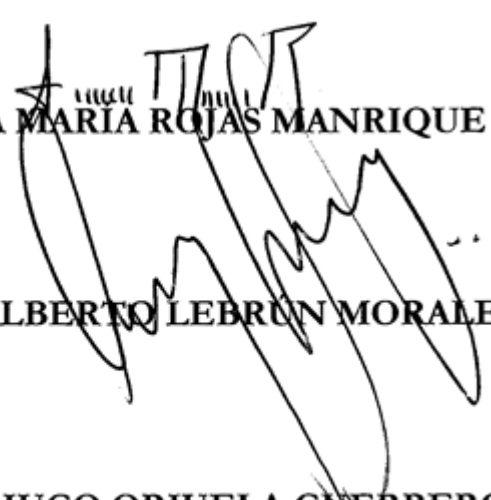
6.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
(Sin firma por ausencia justificada)